

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Juzgado Diecinueve Civil Municipal

Bogotá D.C, dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Ref. No. 2022-00610.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve el Despacho las objeciones formuladas por la acreedora Aura María Córdoba Araque a la relación de acreencias efectuada por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición Fundación Liborio Mejía, dentro del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante de Alfonso Rodríguez Rodríguez.

II. ANTECEDENTES

1. El señor Alfonso Rodríguez Rodríguez, promovió solicitud de negociación de deudas de persona natural no comerciante, en la cual relacionaron varias acreencias dentro de ellas: una de segunda clase a favor del Banco de Bogotá por \$48.300.000 y 13 de quinta clase figurando como acreedores Banco de Bogotá S.A., Bancolombia, Compañía de Financiamiento Tuya S.A., Serfinanzas, Scotiabank Colpatria S.A, Satrack INC de Colombia Servisat S.A.S, Telmex Colombia S.A-Claro Soluciones Fijas y Aura María Córdoba Araque por la suma total de \$54.706.745, cuyo conocimiento correspondió a la operadora de insolvencia Sara Marín Muñoz del el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición Fundación Liborio Mejía que, en auto No. 1 de 25 de febrero de 2022, admitió la petición y en consecuencia, ordenó comunicar a todos los acreedores relacionados por la deudora peticionaria y la notificación a las agencias judiciales para prevenirlos sobre la actuación.

2. En audiencia celebrada el 21 de abril del año en curso, se puso en conocimiento de los acreedores la relación detallada de las acreencias denunciadas y se actualizaron los montos de capital e intereses, así como la clase de crédito de cada uno de ellos. Durante dicha audiencia la acreedora Aurora María Córdoba formuló objeciones.

3. Dentro de la oportunidad la referida la citada señora, presentó la sustentación de las objeciones frente a la acreencia de segunda clase constituida

a favor del Banco de Bogotá, argumentando que la misma debe ser excluida del trámite concursal dado que el acreedor nunca compareció a la negociación de deudas para efectos de defender sus intereses o demostrar la existencia, naturaleza y cuantía de la obligación pese a que fue notificado en debida forma.

4. De las objeciones se corrió traslado al deudor quien se pronunció para coadyuvar la petición, como quiera que se han llevado a cabo tres sesiones a fin de normalizar su situación financiera con sus acreedores y a pesar de que las notificaciones por parte del centro de conciliación se adelantaron en debida forma, incluso se realizaron gestiones de manera personal para lograr su comparecencia no ha sido posible lograr un acuerdo de pago, toda vez que, no se cuenta con el *quorum* necesario para tal fin. Por esta razón solicita relacionar la deuda a favor del Banco de Bogotá en \$0.

III. CONSIDERACIONES

1. Dentro del amplio abanico de posibilidades con que el deudor cuenta para honrar sus obligaciones frente a sus acreedores producto de una crisis por el sobreendeudamiento u otros factores, el Legislador creó un nuevo régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes, que tiene como punto de partida el procedimiento de negociación de deudas, luego, la convalidación del acuerdo privado y la liquidación patrimonial.

Ubicados en el primer escenario, cumple anotar desde el umbral que se trata de una serie de procedimientos en virtud de los cuales intervienen el deudor y sus acreedores, en cuya primera fase está encaminada a buscar alternativas efectivas de solución de las obligaciones vencidas a través de distintas fórmulas de arreglo que permitan llegar a lo normalidad crediticia.

En ese sentido, la proposición debe ser clara, expresa y objetiva, es decir, acorde con su estado patrimonial y el de los convocados; en otros términos, equilibrada, razonable, proporcional, posible de cumplir en procura de buscar la satisfacción e igualdad de los acreedores sin desconocer los lindes de privilegio que detentan algunas acreencias.

Ahora, la articulación atañedora a este trámite es estricta al señalar que las relaciones o listados de acreedores, activos, procesos judiciales, certificaciones, en fin, toda clase de información que es de su esencia, deben ser fieles a la realidad, completos, detallados y sobre todo actualizados *“con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud”* (parágrafo 2º art. 539 CGP).

Así, pues, cuando la solicitud incumple tales exigencias, es imperativo para el funcionario concursal, inadmitirla señalando sus defectos para que sean enmendados por el interesado, de no ser acatado, se procederá a su rechazo. En caso contrario y una vez sufragadas las expensas, le imprimirá el trámite de rigor como lo señala la normatividad –artículos 542 y siguientes- que supone una serie de efectos a partir de la aceptación –artículo 545-.

2. Precisamente, una fase introductoria se gesta en la audiencia de negociación de deudas *“que constituirá el nudo principal del procedimiento”*¹, previa citación en legal forma de todos los acreedores que impone, en rigor, que tales actos de intimación se surtan con total transparencia permitiendo así el conocimiento real y efectivo para que el desenvolvimiento no se lleve a cabo a sus espaldas con violación de sus derechos superiores que ello acarrearía.

Esta audiencia constituye un acto de vital importancia *“la médula del procedimiento de negociación de deudas”* que busca sentar al deudor y sus acreedores a discutir la solución de la crisis. Una primera fase comprende el debate sobre los créditos incorporados por el deudor con miras a que ejerzan sus derechos de contradicción. En la segunda parte, se discutirá sobre la propuesta del deudor y se someterá a votación.

Dice la norma que el conciliador pondrá en conocimiento de los acreedores la **“relación detallada”** de las acreencias y les preguntará si están de acuerdo con la existencia, naturaleza y cuantía. En caso de disenso –objeciones – deberá procurar conciliarlas a través de distintas fórmulas de arreglo que, de declararse fracasada, procederá conforme los artículos 551 y 552 ibídem. El operador debe suspender la audiencia por el término de 10 días, para que, dentro de los cinco (5) primeros días, los inconformes presenten las objeciones por escrito junto con las pruebas que pretendan hacer valer. Otro término igual, correrá para los demás acreedores y deudor para que se pronuncien y aporten pruebas.

Frente a tales reparos, se itera que es menester que el deudor presente una solicitud de trámite de negociación de deudas atendiendo todos y cada uno de los requisitos dispuestos en el artículo 539 del Código General del Proceso, entre estos, debe incluir un listado de los bienes, una relación completa y actualizada de todos los créditos señalando la cuantía de cada uno de ellos y diferenciando capital e intereses, la naturaleza de los mismos, la tasa de interés aplicada y demás circunstancias que resultan de carácter relevante en caso de no contar con toda la información deberá manifestarlo de forma expresa, siendo así, es deber del conciliador designado o en su defecto del notario previo a la admisión comprobar el cumplimiento de tales exigencias.

¹ Pájaro Moreno, Nicolás. REGIMEN DE INSOLVENCIA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE. ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE. <https://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/16nicolas-pajaro-moreno.pdf>

A su vez el parágrafo primero del precitado canon preceptúa que: *“La información de la solicitud del trámite de negociación de deudas y las declaraciones hechas por el deudor en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, **se entenderán rendidas bajo la gravedad del juramento y en la solicitud deberá incluirse expresamente la manifestación de que no se ha incurrido en omisiones, imprecisiones o errores que impidan conocer su verdadera situación económica y su capacidad de pago**”.*

De lo anterior se desprende que las manifestaciones efectuadas por el deudor gozan de plena validez en la medida que se entienden rendidas bajo la gravedad de juramento de ahí que la información suministrada se presuma cierta, pues de otro modo supondría vulnerar el principio de buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución Política. Al respecto el máximo tribunal en materia constitucional precisó:

*“La Corte ha señalado que la buena fe es un principio que de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, pero **dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario.**”²(énfasis fuera de texto)*

Bajo esta perspectiva sobre el requisito de la relación completa y actualizada de todos los créditos y acreedores, la doctrina ha dicho que se fundamenta en la prerrogativa antes citada así: *“Este requisito es desarrollo de los principios de colectividad e igualdad. En efecto, el deudor debe relacionar todos y cada uno de sus acreedores, **relación que de una parte es expresión del principio de buena fe** y comporta por tanto el reconocimiento de la existencia y cuantía de cada una de las obligaciones que se reclaman.”³*

En ese norte, la intervención del Juez Civil Municipal se circunscribe, en una primera etapa, a la resolución de las objeciones, tal como lo prevé el artículo 552 de la Ley 1564 de 2012.

3. Conforme a las anteriores precisiones, descendiendo al caso objeto de estudio, se advierte que la queja presentada por la acreedora Aura María Córdoba Araque, acá reclamante, hace referencia a la falta de interés del acreedor prendario BANCO DE BOGOTÁ S.A en hacerse parte en el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante Alfonso Rodríguez Rodríguez, asunto que a

² Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil.

³ Juan José Rodríguez Espitia (2015), Régimen de Insolvencia de la Persona Natural No Comerciante, Universidad Externado de Colombia.

todas luces no corresponde a una objeción frente a la existencia, naturaleza y cuantía de dicha obligación.

En efecto, la inconformidad de la objetante no se encamina a cuestionar la existencia de la obligación o su monto, o porque la información suministrada por el deudor en la solicitud de negociación de deudas no se ajuste a la realidad o que la deuda sea ficticia, sino que, solicita su cuantificación en \$0 debido a que el Banco de Bogotá no compareció al proceso de negociación pese a ser notificado en debida forma.

Siendo así, es menester recordar que en este tipo de trámites no constituye un requisito esencial que todos los acreedores se hagan parte en el concurso, si bien para la celebración del acuerdo de pago el artículo 553 del Código General del Proceso exige que éste sea aprobado por dos o más acreedores que representen el cincuenta (50%) o más del monto total del capital de la deuda debiendo contar con aceptación expresa del deudor, esta circunstancia de modo alguno implica que ante la no comparecencia de alguno de ellos se deba excluir su obligación o desmeritar sus derechos para concretar el acuerdo, incluso si su ausencia significa no conseguir la mayorías exigidas por la ley.

En estos eventos la consecuencia no puede ser otra que declarar el fracaso de la negociación y por consiguiente dar paso a la liquidación patrimonial, sin que se pueda requerir de forma imperativa que el solicitante aporte documentos para demostrar las prestaciones a su cargo en la medida que las manifestaciones elevadas se encuentran amparadas en el principio de buena fe, es más en el particular ni siquiera se pone en duda por parte de la señora Aura María Córdoba Araque la veracidad de la información.

Ahora, no se puede perder de vista que si se tratara del caso contrario en el cual un acreedor no compareció al procedimiento de negociación de deudas y aún con su ausencia se celebró el acuerdo de pago, éste igualmente resulta vinculante para la totalidad de acreedores citados, con independencia de si su voto es negativo o no asistieron a la diligencia, prueba de esto es que en el numeral 3° del precitado canon 553⁴ se establece como uno de los requisitos mínimos que debe comprender dicho convenio, de manera que el mismo legislador en la normatividad que regula la materia incluyó la posibilidad de que no todos se hicieren presentes para hacer valer sus intereses en el escenario concursal siendo un asunto netamente discrecional. Sobre el punto la doctrina ha precisado:

“El mismo artículo 553 contiene una serie de reglas atinentes al contenido del acuerdo, esto es, sobre quién, qué y cómo recae el mismo. En primer lugar, el numeral 3 indica que el

⁴ Artículo 553 del Código General del Proceso: Contenido del Acuerdo. Num. 3° debe comprender a la totalidad de los acreedores objeto de la negociación.

*acuerdo debe “comprender a la totalidad de los acreedores objeto de la negociación”, todo sin perjuicio de que el acuerdo no sea votado por su totalidad. **Es decir, el acuerdo vincula a los acreedores disidentes y ausentes**, siempre que respeten las mayorías exigidas por la ley”⁵*

4. En ese orden de ideas habrán de declararse infundadas las objeciones formuladas por Aura María Córdoba Araque en el trámite de la referencia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

V. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADAS las objeciones formuladas por la acreedora Aura María Córdoba Araque.

SEGUNDO: ADVERTIR a las partes que contra esta decisión no procede recurso alguno por expresa remisión, parte final del inciso 1º del artículo 552 del Código General del Proceso.

TERCERO: REMITIR por secretaría de INMEDIATO al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición Fundación Liborio Mejía, las presentes diligencias para lo de su competencia. Déjense las constancias del caso. Oficiese.

Notifíquese y cúmplase,⁶

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ
JUEZ**

⁵ Juan José Rodríguez Espitia (2015), *Régimen de Insolvencia de la Persona Natural No Comerciante*, Universidad Externado de Colombia, Pag. 245.

⁶ Esta providencia se notificó por estado No 88 de 17 de agosto de 2021.

Firmado Por:
Iris Mildred Gutierrez
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 019
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **417ac28be4cc81c1fe48f9ec4edbbf79b65cfa7067c2a0b1fd6d5332bc4d84a4**

Documento generado en 16/08/2022 05:28:00 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>